



ISSN: 1390-1249; e-ISSN: 1390-8065

Estela Grassi y Susana Hintze, coords.
Tramas de la desigualdad. Las políticas y el bienestar en disputa
Buenos Aires: Prometeo, 2018, 430 págs.

La desigualdad, como objeto de estudio en las ciencias sociales, cuenta con una trayectoria destacable. Especialmente en nuestra región, ha sido prolífica la producción investigativa generada a raíz de la instauración del neoliberalismo y el desarme de los esquemas de protección social que éste involucró. Así, dependiendo del grado de desarrollo de los “Estados sociales” en cada país y de la precocidad y profundidad de las acciones privatizadoras y mercantilizadoras en el ámbito del bienestar de la población, este tema empezó a analizarse de manera sistemática. Es verdad que la mayoría de las veces fueron más sus síntomas o los fenómenos a ella asociados (pobreza, indigencia, desnutrición, entre otros) los que captu-

raron el mayor interés, cuestión que tampoco fue ingenua al dominio neoliberal.

Ahora bien, no tan copiosa resulta la producción académica que se interesó por las “productividades” menos visibles de la desigualdad, aquellas que modifican las subjetividades y afectan las relaciones entre los miembros de la sociedad. Como indica Elias, los problemas de la sociedad aluden a ésta en tanto “configuración” formada por individuos.¹ La idea de configuración expresa la imagen de un ser humano como personalidad abierta que posee siempre una relativa autonomía en relación con otras personas porque se orienta hacia ellas; es dependiente de ellas. La interdependencia no solo es central sino constitutiva de las subjetividades. Por ello, resulta infructuoso analizar la configuración solamente a partir de sus componentes sin considerar las “relaciones de interdependencia” formadas por los individuos.

Por esta razón, el libro colectivo coordinado por Estela Grassi y Susana Hintze resulta un aporte significativo al estudio sobre la desigualdad porque su mirada está puesta en las tramas de sentido que se conforman en torno a ésta, en las interpretaciones, posiciones y puntos de vista que constituyen los vínculos entre las personas que integran la sociedad. La desigualdad en este plano revela una productividad potente en términos de distinciones, jerarquías y, fundamentalmente, de explicaciones que hacen posible tales distancias y las justifican.

Si bien el libro trata sobre la Argentina de los últimos tres lustros (2003-2017), su propuesta de investigación y sus hallazgos resultan aplicables a otras realidades latinoamericanas; especialmente las de aquellos países que

1 Norbert Elias. 2016. “Introducción. Ensayo teórico sobre la relación entre establecidos y marginados”. En *Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre los problemas comunitarios*, de Norbert Elias y John Scotson, 27-71. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica (FCE), p. 33.

vivieron experiencias neoliberales radicales, posteriormente intentos (más o menos exitosos) de oposiciones a este paradigma y, de manera más reciente, regresiones que implicaron la instauración de gobiernos o coaliciones gubernamentales de derecha como es el caso de Brasil, Argentina y Ecuador.

La obra se centra en lo acontecido entre el Gobierno y el proyecto político peronista de orientación progresista y popular de Néstor y Cristina Kirchner, y aquel que empezó a desplegarse en diciembre de 2015 cuando asumió el poder la alianza Cambiemos, que puso a Mauricio Macri en la Presidencia de la República.

La entrada teórico-conceptual resulta otra contribución adicional porque indaga la desigualdad “a través” de dos ideas que indefectiblemente se ponen en juego en el ámbito de las protecciones sociales. Estas ideas son las de la autovalía de las personas y la legitimidad del derecho a disponer de dichas protecciones. Es decir, todas las sociedades definen qué grado de amparo asumen frente a los riesgos de la población. ¿Cuáles riesgos quedan bajo la responsabilidad estrictamente privada de los individuos y cuáles resultan asumidos por el conjunto social? Desde este lugar es clave identificar “la legitimidad” que se construye en torno a tales ideas y alrededor de sus contenidos. Más allá de los arreglos familiares para garantizar la vida de las personas, de lo que cada uno pueda autónomamente proveerse en el mercado mediante la compra de bienes y/o servicios, o de lo que las comunidades muy cercanas puedan proporcionar (agrupaciones, mancomunidades, asociaciones), existen sistemas institucionales públicos que sostienen la vida de la ciudadanía. Y, en este sentido, hacen posible la producción y reproducción de la sociedad. De manera permanente, estos entramados institucionales son objeto de reflexividad política y cultural y por ello son

igualmente objeto de críticas enraizadas en visiones del mundo que apoyan o erosionan su legitimidad.

Ahora bien, como señala el libro, la clásica contraposición entre individuo y sociedad que se expresa en la noción de autovalía ha oscurecido la constatación de que incluso la posibilidad de trabajar depende de tales soportes institucionales. Estos hacen viable el desarrollo de las capacidades, de los talentos y hasta de los “méritos propios que son siempre potenciales” (p.18) para estar en condiciones de ganarse la vida mediante el trabajo. Por ello la centralidad que adquieren las políticas socio-laborales en la definición de las condiciones de la vida colectiva, y no solo la de los pobres.

La hipótesis alude justamente a situaciones en las que la operatoria de políticas e instituciones –que permiten el desenvolvimiento de la vida de las personas, escapando del apremio de la no supervivencia o del mal vivir a pesar de trabajar– se vuelve “invisible”. Situaciones en las que deviene inapreciable la propia dependencia y hasta la posibilidad del desamparo para aquellos que están protegidos de tales riesgos. La tesis que se pone en juego es que los cuestionamientos que se registraban tanto en los debates políticos como en las expresiones del sentido común respecto a la política social en general y al sistema de protección social en particular, desarrollados entre 2003 y 2017, socavaron progresivamente su legitimidad. ¿Por qué? Porque estos cuestionamientos revelaron la productividad subterránea de las desigualdades de la sociedad argentina. Desigualdades que registran larga data y con efectos perdurables que no pudieron ser contrarrestados por las políticas igualadoras durante los interregnos “progresistas”.

Dos elementos expresan de manera patente tales cuestionamientos. El primero se refiere al reforzamiento de un ideario particularista

que abrevó en ideologías individualizantes y meritocráticas. El segundo fue una crítica a los procesos de redistribución material que dieron lugar, por un lado, a un aumento del consumo popular, especialmente de sectores a los que antes les estaba vedado y, por el otro, a tensas y conflictivas sociabilidades compartidas. Respecto a este último punto, piénsese en los efectos (des)igualdadores de políticas que implicaron que ciertas instituciones, antes reservadas a un tipo de beneficiarios, albergaran ahora a otros. Estas cohabitaciones no estuvieron exentas de resistencias y polarizaciones.

Para la contrastación de la hipótesis, el libro se centra en dos procesos interconectados que dieron contenido a la autovalía y a la dependencia legítima. El primero captura los fundamentos generales de la política social y de los sistemas de protección, es decir, da cuenta de los fundamentos político-culturales de dicha institucionalidad y de la crítica deslegitimadora que sobre ella se desplegó. El segundo se refiere al proceso de toma de posición que sobre esta institucionalización desplegaron distintos sectores de la sociedad. En este también se hizo presente la crítica. El libro refleja ambos procesos en su organización mediante dos macrosecciones o partes.

Una que alude al primer proceso titulada: “Política y soportes socioinstitucionales de la vida social” en el que se despliegan tres capítulos elaborados respectivamente por Estela Grassi (capítulos 1 y 2) y Alejandra Beccaria, Claudia Danani y Sergio Rottenschweiler (capítulo 3), en donde se da especial énfasis al tema del trabajo y, asociado con éste, la seguridad social por el papel determinante que cumple en la garantía de las condiciones de vida de la población. Además porque sobre éste se concentró la intervención estatal en la etapa kirchnerista sobre la cual se montó buena parte de la crítica deslegitimadora. La segunda sección del libro titulada: “Interpretaciones, la

trama de los recursos y la autovalía. Trabajadores, reflexividad y sentidos en disputa” alberga cinco capítulos que enfatizan en las tramas de sentido que se desplegaron respecto a las políticas y la institucionalidad de la protección social. En orden de aparición, el capítulo 4 está dedicado al “merecimiento” en el ámbito de las transferencias monetarias y su relación con el trabajo, de autoría de Malena Hopp y Eliana Lijterman. El capítulo 5, elaborado por Susana Hintze, aborda los sentidos atribuidos al trabajo realizado en cooperativas y la legitimidad social de estas nuevas formas laborales. Seguidamente Florencia Luci, en el capítulo 6, busca reconstruir las formas de argumentación sobre la pertenencia legítima a la sociedad entre trabajadores de clase media, a la que reconoce como “identidad madre” para los argentinos porque en ella se juega mucho de pertenencia a la nación argentina. Ser parte de ésta implica una forma legítima de participación en una sociedad que hizo y hace de las nociones de progreso, esfuerzo y mérito sus principios superiores. Por su parte, María Crojethovic y Maitena Fidalgo, en el capítulo 7, analizan los sentidos que circulan públicamente referidos a los bienes y servicios de salud para dilucidar las justificaciones acerca de las desigualdades para los distintos sectores sociales. Finalmente Emilio Ayo y Tatiana Jack (capítulo 8) advierten otra problemática que anida en la oferta pública y en las interpretaciones que sobre ésta se desplegaron: la inseguridad y el miedo al delito. Hallan una trascendental identificación del “otro” delincuente con la crítica a las propuestas de una política de seguridad democrática y con la proposición de intervenciones represivas dirigidas a poblaciones que respondan al estereotipo construido (principalmente jóvenes de sectores populares), los que justamente no pueden reclamar legítimamente la dependencia hacia la protección social.

Así parece entonces empezar a revelarse con claridad la trama de sentidos que fue conectando, en el libro y en la realidad, el plano de las interpretaciones y los puntos de vista (segunda parte) con las problemáticas, las políticas, las instituciones y las subjetividades construidas (primera parte). Como sostienen los autores, son esas “demandas e interpretaciones las que fueron cooptadas por el discurso político que sobre sufrimientos cotidianos de la población trabajadora montó la crítica deslegitimadora de las instituciones sociales y se ofreció como alternativa para recomponer los lugares legítimos” (p. 35).

Por ello, la operatoria discursiva de Cambiemos, crítica con lo acontecido entre 2003 y 2015 y que adquiere carácter estatal cuando dicha alianza accede al Gobierno nacional, resulta incomprensible sin esa trama que se gestó muchos antes. Ahora bien, el libro descubre que dos potentes dinámicas, producidas simultáneamente, ordenaron e hicieron inteligible el nuevo discurso. Por un lado, la “despolitización de la cuestión social” mediante un abanico de estrategias tales como: dividir (la grieta) y luego reunificar a los argentinos bajo categorías (la gente) que negaban la desigualdad y el conflicto de clases; el solapamiento de la historia (crítica a la noción de relato); el desacople entre verdad y datos empíricos; la individuación (y, por ende, descolectivización) del sujeto de la comunicación política; y la puesta de lo doméstico como foco de interés público. Por otro lado, la “repolitización del campo problemático” (de los asuntos públicos y de la misma cuestión social) en términos de miedo, inseguridad, crisis y desorden. La “inseguridad de la gente” se constituyó en eje fundamental de esta operatoria. Los nuevos

peligros desplegados fueron: la protesta social, la crisis terminal, el populismo y la irresponsabilidad en el uso de los fondos públicos.

Por ello, reaparece con fuerza lo que es naturalizado por la nueva clase gobernante: la distinción por el consumo. El derecho a las protecciones sociales se retrotrae al acceso al mercado y el trabajo se redefine y marca la frontera de distinción entre los “autoválidos y autosuficientes” frente a los “autoválidos pero dependientes”, cuya necesidad, por esa misma razón, se vuelve ahora ilegítima. Sobre ellos lógicamente recaerá la desconfianza social por el abuso o por la futilidad e inutilidad que suponen para la sociedad. Sobre ellos se constituirá el imaginario del caos y la inseguridad; su único “potencial” será el delictivo o criminal.

Será importante tener en cuenta tales descubrimientos para aquellos que analicen lo sucedido en el Ecuador contemporáneo. No solo por las similitudes respecto a los desarmes protectivos que se inauguraron con la llegada de la alianza gobernante entre Moreno Garcés y la derecha ecuatoriana, sino fundamentalmente por los cuestionamientos hacia las políticas y al sistema de protección social desarrollados entre 2007 y 2017. Especialmente si se confirma que tales críticas se sustentaron también en un conjunto de efectos desigualadores (creación de nuevas distinciones, jerarquías y exclusiones) ligados con dinámicas de movilidad social ascendente e incorporación política y social de amplios sectores sociales.

Analia Minteguiaga
Instituto de Altos Estudios Nacionales,
Ecuador